

Editorial

Las elecciones: “el fiasco del siglo”

En dos editoriales anteriores nos planteamos si las elecciones generales de 1994 serían históricas y libres (ver ECA 537-538 y 539), tal como lo afirmaba el discurso oficial. En ambos casos, cuestionamos dicho discurso y advertimos en qué condiciones precisas estas elecciones podrían considerarse tales. Es más, atendiendo al contexto histórico, afirmamos que estas elecciones no iban a ser ni una cosa ni la otra. La evidencia empírica muestra que las elecciones de 1994 no han sido ni limpias, ni transparentes, ni libres y, por lo tanto, cuestionan la representatividad del nuevo gobierno. En este sentido, las elecciones no son “aceptables”.

Conviene, sin embargo, volver sobre el carácter histórico de las elecciones, no tanto para confirmar a posteriori cuán acertado era nuestro análisis, sino para subrayar lo que el evento electoral revela sobre la situación actual y futura de El Salvador. Lo haremos analizando tres aspectos fundamentales de las elecciones, el elevado nivel de la abstención, el voto a favor del partido ARENA y su aporte al proceso de transición.

1. Desconfianza, desinterés y polarización

El registro electoral, según el Tribunal Supremo Electoral, consta de 2.7 millones de electores; sin embargo, según ONUSAL, el día de la elección, sólo 2,350,000 electores tendrían su carné y, por lo tanto, únicamente ellos podrían votar. Así, pues, entre el observador internacional y el Tribunal Supremo Electoral existe una diferencia nada despreciable de unos 400 mil electores. Esta discrepancia es la muestra más palpable de que nadie sabe exactamente cuántos ciudadanos componen dicho registro. Para nuestro análisis tomaremos el dato de ONUSAL por ser más confiable.

La constatación más importante de estas elecciones es el poco interés en la política y en participar en ella, el consecuente poco interés en la campaña electoral y la desconfianza en la institucionalidad del Estado.

En la elección presidencial del 20 de marzo sólo votaron 1,431,053 de los 2,350,000 electores activos, equivalentes al 60 por ciento. Por lo tanto, unos 920 mil ciudadanos no votaron. Así, pues, prescindiendo de la enorme cantidad de obstáculos que muchos electores encontraron para emitir el sufragio, el 40 por ciento de ellos no concurrió a las urnas. En la segunda vuelta de la elección presidencial, la abstención (47 por ciento) volvió a ser una característica importante, pese a la publicidad del Tribunal Supremo Electoral que prometía que el 24 de abril "votar sería más fácil" y a la millonaria publicidad del partido oficial para motivar a la población a concurrir por segunda vez a las urnas.

Si estos datos los consideramos desde la tradición electoral anterior a la guerra, el abstencionismo es elevado, pero si los comparamos con el comportamiento electoral durante ésta, resulta normal. Es innegable que el abstencionismo desconcertó a quienes esperaban una concurrencia masiva a las urnas el 20 de marzo en correspondencia con las transformaciones experimentadas en el país. Por eso, el dato es importante en sí mismo y también lo es por lo que revela acerca de la situación actual de El Salvador.

Cómo explicar este fenómeno que limita el alcance del triunfo del partido oficial y cuestiona la representatividad del nuevo gobierno así como la alternativa ofrecida por la Coalición de izquierda. Ciertamente, este elevado abstencionismo no puede explicarse por los obstáculos innumerables que encontró el ciudadano para emitir el sufragio el 20 de marzo, tal como denunciaron algunos voceros de la izquierda. Tampoco es real el dato de ONUSAL que cuantifica la abstención forzada —en cuanto se impidió emitir el sufragio— en 25 mil votantes. Esta cantidad responde sólo a aquellos que informaron al observador de la misión que les habían impedido votar.

La abstención que caracteriza las elecciones de 1994 puede explicarse por la desconfianza en la transparencia del proceso, por el desinterés de la población en la política y por el rechazo a participar en un evento electoral polarizado intensamente. Analicemos cada una de estas razones.

(a) La desconfianza en la transparencia del proceso. De acuerdo a la encuesta pre-electoral del IUDOP de febrero, casi la mitad de la población tenía poco o ningún interés en el proceso electoral. Correlativamente, los ciudadanos mostraban una invariable desconfianza hacia el mismo. En consecuencia, ni el final de la guerra ni los acuerdos de paz



han modificado la desconfianza de la población hacia las elecciones. Las encuestas de 1989, cuando aún había conflicto armado, indican que el 39.3 por ciento pensaba que las elecciones de ese año serían limpias. Cinco años más tarde, cuando el conflicto armado ha cesado, la confianza en el evento electoral es prácticamente la misma, el 40 por ciento.

De hecho, el IUDOP percibió un eventual abstencionismo en la encuesta de febrero, pero éste pasó desapercibido porque el interés de los medios de comunicación y de los políticos se centraba en quién ganaría las elecciones. Semanas antes de los comicios, el 45 por ciento de los encuestados decía dudar de si el resto de la población votaría. A posteriori, se constata que esta respuesta estaba referida más a la propia actitud frente al proceso electoral que a la de los demás.

La desconfianza de la población no se concentra únicamente en el sistema electoral, sino que es general frente a toda la institucionalidad del Estado. El reiterado incumplimiento de los compromisos adquiridos en los acuerdos de paz así como los silencios, las medias tintas y la diplomacia exagerada que han avalado el estancamiento de algunas áreas críticas y, o que han ocultado la ausencia de las realidades nacionales nuevas prometidas han reforzado la desconfianza secular de la población. Por lo que toca a la izquierda, la pérdida de interés de la población empezó cuando aquélla no pudo, o no quiso, contrarrestar el rechazo del informe de la Comisión de la verdad por parte de la derecha, cuando no pudo explicar la existencia de los depósitos de armas y cuando los acuerdos de paz, incluida la reinserción de los ex combatientes, desaparecieron de su agenda pública. Tampoco olvidemos que hasta hace muy poco los grupos en el poder desprestigiaron sistemáticamente los eventos electorales con el fraude y la izquierda, entonces insurgente, los desautorizó y, en la práctica, los boicoteó.

El cúmulo de anomalías e irregularidades del 20 de marzo dio la razón a quienes se abstuvieron por desconfianza. La mayoría de éstas no son nada nuevo, puesto que el electorado ha estado votando en condiciones de desorganización crónica. Las anomalías del 20 de marzo se dieron en la elección de 1991 y aun en la de 1989. En estas elecciones, el votante experimentó dificultades para saber si se encontraba en el padrón y en qué urna le correspondía votar. Así, pues, ni los acuerdos de paz ni la observación internacional han transformado el sistema electoral que sigue padeciendo de los males estructurales del pasado.

El sistema electoral está estructurado de tal forma que impide el voto masivo de los ciudadanos al suponer una población con un nivel de alfabetización elevado. Por eso es imposible que funcione en un país como El Salvador, donde la mitad de la población, según datos oficiales, es analfabeta y otro buen porcentaje es analfabeto funcional. En estas circunstancias, es muy difícil que la población se encuentre en las listas electorales, que dé con la urna correspondiente e incluso con el centro de votación donde le corresponde emitir el sufragio (la publicación en los medios impresos de los centros de votación y de la distribución de los apellidos en las urnas sólo es útil para aquellos que saben leer y leen los periódicos), que la junta receptora de votos identifique en su lista los datos del carné, que el escrutinio se lleve a cabo con rapidez, que las actas se levanten de manera correcta, etc. Está comprobado que muchos de los integrantes de las juntas receptoras no sabían firmar.

A todo esto hay que añadir la ineficiencia, culposa o no, del Tribunal Supremo Electoral, responsable de un retraso de hasta dos horas en la apertura de los centros de votación, de la falta de información sobre su

ubicación, de la aglomeración de la juntas receptoras de votos, de la falta de orientación para que los ciudadanos se encontrasen en las listas y la urna respectiva, de los errores del registro electoral —desorden alfabético en los listados, ciudadanos con carné que no aparecen en él o cuyos datos personales no coinciden con los de éste—, de la retención del carné de muchos ciudadanos así como de que otros tuviesen más de uno, del sufragio de los difuntos y de los residentes en el exterior, de que unos hayan votado por otros, de que quienes se encontraban aguardando su turno para votar en el centro de votación a las cinco de la tarde se les haya impedido hacerlo, de la falta de capacitación a las juntas receptoras de votos, de las condiciones inadecuadas para contar los votos y levantar las actas, del mal uso de la tinta —la mejor garantía para evitar el doble voto—, de la propaganda partidista dentro y fuera de los centros de votación y más allá de los plazos establecidos por la ley, de la propaganda contraria a los compromisos adquiridos por los partidos y candidatos, de no haber nombrado al auditor previsto por la ley, de la lentitud y falta de transparencia en el manejo de los resultados preliminares y en el escrutinio final, y de la forma festinada como se evacuaron las impugnaciones presentadas por los partidos políticos en un nivel tan fundamental como el municipal.

Exceptuando un mejor servicio del transporte público, más centros de votación en las ciudades grandes —pero no tantos como fueron recomendados— y unos 30 mil inscripciones nuevas en el registro electoral, todo lo demás permaneció intacto en la segunda vuelta, pese a las promesas de introducir modificaciones. La poca afluencia de votantes hizo que la elección fuese fluida y encubrió las deficiencias no corregidas del 20 de marzo, evitando la repetición de lo sucedido ese día.

Algunas de estas irresponsabilidades del Tribunal Supremo Electoral constituyen delito electoral. Mientras no se investigue de oficio y se establezcan responsabilidades, sobre él recae la duda de un “fraude técnico” y sobre los resultados electorales se cierne una duda razonable acerca de su legitimidad. Por su lado, la población no votó masivamente porque desconfía secularmente del régimen político vigente. Al no concurrir a las urnas masivamente en dos oportunidades, la población rechazó el sistema electoral, cuestionó la legitimidad de las elecciones y limitó el alcance del triunfo del partido oficial.

(b) El desinterés de la población en la política. La abstención demuestra de manera clara que los partidos políticos no pudieron motivar la participación de los ciudadanos como tampoco erradicaron su miedo. Pese a la larga, intensa y millonaria publicidad electoral, sobre todo del partido oficial, buena parte de la población no se interesó en las elecciones. Para quienes se abstuvieron de votar, ni el partido oficial ni la

Coalición de izquierda representan una alternativa viable, pues piensan que todo va a continuar más o menos igual. La apatía era tanta que las elecciones no fueron tema de conversación en la mayoría de la población, la cual fue más bien receptora pasiva de la publicidad electoral.

El desinterés es más notable en la segunda vuelta, cuando la publicidad del partido oficial insistió en la participación masiva para decidir el futuro del país. La Coalición, por el otro lado, aunque más modestamente, también intentó convencer a la población de que había llegado el momento de optar por "la gente", porque representaba una alternativa frente al neoliberalismo del partido oficial y a su pasado de violación de los derechos humanos y de vinculación a los escuadrones de la muerte. Si estos mensajes buscaban motivar la participación masiva, ambos cayeron en oídos sordos. Cabe observar aquí que, según el IUDOP, la Coalición sólo consiguió un 13.3 por ciento de electores nuevos, puesto que los demás ya habían votado en los comicios anteriores.

El interés y la participación política, según las investigaciones del IUDOP, están en relación con el nivel social y con las simpatías partidarias. Entre menos recursos económicos y educación tiene la población, menos interés muestra en la política y en participar en ella. Correlativamente y en el mejor de los casos, la mayoría de la población percibe que la política del gobierno no mejora su situación. Esta percepción es mayor entre los más pobres y los menos educados, para quienes sobrevivir es prioritario. No es extraño, entonces, su desinterés en la campaña electoral. El desinterés aparece con más fuerza entre quienes no quisieron declarar su intención de voto. La desconfianza es mayor entre los "indecisos" y los que votarían por la izquierda. Así, pues, el desinterés y la desconfianza están vinculados al bajo nivel educativo, incluida la educación política.

En consecuencia, los "indecisos" podrían estar mejor definidos como "marginados políticos". Aunque no es nada fácil conocer si esa marginación es voluntaria u obligada, los datos indican efectivamente que, más que dudar sobre por qué partido político votar, quienes no manifestaron su intención de voto, en realidad, se encuentran al margen de la vida política nacional. Esta constatación es más relevante en cuanto que la publicidad electoral ha insistido en lo fácil y en la importancia de la participación. No en valde, en el pasado, se obligaba a la población a emitir el sufragio y ahora se la ha obligado a obtener el carné electoral. Sin temor a exagerar

No es aventurado afirmar que ha habido una conspiración para impedir la votación masiva de la población electoralmente activa, obstaculizando el sufragio de unos y ahuyentando de las urnas a quienes temen la polarización.

se puede afirmar que la constatación más importante de estas elecciones es el poco interés en la política y en participar en ella, el consecuente poco interés en la campaña electoral y la desconfianza en la institucionalidad del Estado.

(c) La polarización. El partido oficial introdujo subrepticia pero eficazmente la polarización en la campaña electoral, la cual se caracterizó por una ideologización extremada e intensa. Esto no afloró tan claramente en la publicidad oficial del partido gubernamental, en la cual se proyectó una imagen de moderación y ecuanimidad, como en la publicidad de las instituciones y los medios de comunicación social identificados con la ideología tradicional de ARENA, cuyos elementos fundamentales son el anticomunismo visceral, el nacionalismo decimonónico, el autoritarismo y la prepotencia. De esta manera, la campaña electoral del partido gubernamental mostró las dos caras de una misma realidad. Pese a su discurso oficial, ARENA no ha experimentado aún transformaciones suficientes como para considerarlo un partido moderno de derecha. Así lo demostró el comportamiento de sus militantes en los comicios y en la celebración del triunfo presidencial, donde salió a relucir la pobreza ideológica del partido.

La amenaza y el miedo que prevalecieron durante la guerra se volvieron percibir con fuerza en los meses de campaña. La elección se planteó abiertamente como una opción entre el comunismo y la demo-



cracia, la libertad y la esclavitud, ARENA y la destrucción del país. En algunas empresas no sólo se amenazó a los empleados y obreros diciéndoles que si no votaban por el partido oficial no habría inversión, se perderían empleos, no habría libertad religiosa y la situación económica empeoraría, sino que incluso se les obligó a actuar como vigilantes del partido en los comicios.

En las zonas rurales, agentes del partido oficial recordaron a la población que su situación sería peor si no votaban por ARENA. En este medio, su mensaje fue claro, si ARENA no ganaba, los tiempos de la guerra sucia —entiéndase los escuadrones de la muerte— volverían. Algunos párrocos se sumaron a esta campaña advirtiendo severamente a sus feligreses que no votasen por el comunismo. En vísperas de la segunda vuelta, la voz oficial del gobierno denunció que el FMLN tenía planes para propiciar huelgas en el sector público. La amenaza de expulsión de los extranjeros que no son del agrado del gobierno es pública y desafiante así como la hostilidad hacia los observadores internacionales.

En una palabra, el miedo, y en particular el miedo al comunismo y a la izquierda que antes fue guerrilla, ahuyentó a la población de las urnas. Esta fue forzada a optar entre dos alternativas políticas con las cuales no se identificaba y las cuales, por otro lado, tampoco le presentaron una propuesta seria de solución para sus problemas, sino que más bien aumentaron su incertidumbre. Forzada a votar por alternativas inaceptables, optó por no votar.

2. El triunfo de ARENA y sus limitaciones

El resultado de la elección presidencial del 20 de marzo se conoció oficialmente diez días después, debido a las deficiencias del centro de cómputo del Tribunal Supremo Electoral. Según los resultados oficiales de la primera vuelta, del 1,307,657 votos válidos, 651,632 (el 49.11 por ciento) correspondieron a ARENA, 331,629 (el 24.99 por ciento) a la Coalición, 215,936 (el 16.27 por ciento) al Partido Demócrata Cristiano y 127,639 (el 9.62 por ciento) a los otros partidos. Además, se declararon 70,935 votos nulos, 28,381 en blanco y se impugnaron 4,883. Todo ello hace un gran total de 1,431,035 votos emitidos (ver documentación).

Al no obtener la mayoría absoluta, se impuso una segunda vuelta entre ARENA y la Coalición para elegir presidente y vicepresidente. ARENA aventajó a la Coalición dos a uno, 818,264 votos (68.3 por ciento) contra 378,980 votos (31.7 por ciento). Esto significa que ARENA consiguió 172 mil votos más en esta segunda votación, mientras que la Coalición sólo añadió un poco más de 53 mil votos.

En la asamblea legislativa, ARENA obtuvo 39 diputados, el FMLN 21, el Partido Demócrata Cristiano 18, el Partido de Conciliación Na-

**Una lección importante que dejan estas elecciones
es que son necesarias transformaciones estructurales globales
para que todos podamos decidir sobre el destino
de El Salvador en igualdad de condiciones.**

cional 4 (5 menos que en la asamblea que concluye), Convergencia Democrática 1 (y perdió otro por no haber presentado candidatos para la "plancha nacional") y el Movimiento Unidad 1.

En las elecciones municipales, ARENA obtuvo 206 concejos municipales de los 261 donde inscribió candidatos; el Partido Demócrata Cristiano, 29 de 257; el FMLN, 16 de 172; la Coalición 3 de 6; el Partido de Conciliación Nacional, 10 de 253 y el Movimiento Auténtico Cristiano 1 de 102. En este nivel, la abstención forzada fue determinante, puesto que en muchas municipalidades el triunfo del partido oficial se decidió por muy pocos votos. Aparentemente, esta sería la menos llamativa de las cuatro elecciones —incluyendo la del parlamento centroamericano—, pero en la práctica es la más importante, porque en este nivel es donde se comienza a constituir el Estado. El poder del presidente muy rara vez llega hasta las 262 municipalidades, pero el poder municipal se ejerce y se experimenta de manera permanente y directa.

Así, pues, ARENA se mantiene como primera fuerza en la asamblea, aunque no obtuvo ningún diputado nuevo, lo cual pone sordina a las celebraciones triunfalistas de sus dirigentes. Indiscutiblemente, el partido tiene un margen de maniobra muy cómodo en la asamblea al contar con la mayoría simple con los 4 diputados incondicionales del Partido de Conciliación Nacional. Con 43 diputados, ARENA puede aprobar la mayoría de las leyes propuestas.

No obstante la esperada respuesta popular que, al final, no se produjo, el FMLN se ha convertido en la segunda fuerza de la asamblea legislativa. Sin embargo, es una fuerza débil y vulnerable, puesto que tendrá que luchar contra sus propias divisiones internas y contra el bloque integrado por ARENA y el Partido de Conciliación Nacional, al cual tiende a sumarse con demasiada facilidad el Partido Demócrata Cristiano.

El desgaste y la decadencia de este partido, en términos de resultados electorales, son evidentes, pese a su poderosa infraestructura electoral. Las divisiones internas y la corrupción explican parcialmente este hecho. La otra parte de la explicación radica en las maniobras de ARENA que, a base de dinero y presiones de toda clase, logró el derrumbamiento del centro tradicional de la política salvadoreña. Para quienes no se inclinaban por ninguno de los extremos de la polarización, la democracia cristiana dejó de ser alternativa. En la actualidad, el partido no sólo está muy próximo a ARENA, sino que algunos de los sectores que lo

integran se pronunciaron abiertamente por dicho partido en la segunda vuelta e incluso algunos de sus diputados electos provienen de él.

Por lo tanto, es necesario reconocer que ARENA se consolida como el partido más grande y probablemente como el mejor organizado. No es nada despreciable que más de medio millón de salvadoreños haya votado por este partido en la primera vuelta y más de 810 mil lo haya hecho en la segunda, dándole así la presidencia, la mayoría de la asamblea legislativa y de las municipalidades. Sin embargo, el triunfo no es tan aplastante como lo presenta la publicidad electoral, pues sólo el 25 por ciento de la población electoralmente activa votó por ARENA en marzo. Aparte de que no pudo obtener la presidencia en la primera vuelta, tal como lo esperaba y sucedió en la elección de 1989. En la segunda vuelta, el apoyo electoral aumentó, llegando al 34 por ciento de toda la población electoralmente activa. Es decir, en el mejor de los casos, sólo un poco más de un tercio de la población ha dado su voto a ARENA.

Ahora bien, muchos se preguntan extrañados cómo se explica este voto por un partido que es directamente responsable de los problemas principales que afectan a la mayoría de los salvadoreños. De hecho, no es fácil explicar la consolidación de ARENA en el poder, sobre todo cuando la línea que llega a él es, aparentemente, más dura que la de Cristiani. De todas maneras, es indispensable intentar explicar este fenómeno político.

El miedo que priva en la población ha sido un factor determinante para votar por el partido oficial. Desde hace varios meses, las encuestas del IUDOP vienen señalando que entre los salvadoreños predomina el temor, alimentado activamente por la violencia de la delincuencia común, por la impunidad de los escuadrones de la muerte y, últimamente, por la amenaza del "comunismo". Tal como se ha señalado más arriba, la ciudadanía votó por miedo a perder su empleo, a más pobreza, a la guerra sucia, al terrorismo, etc. Todos ellos fueron miedos inducidos hábilmente por la publicidad electoral.

La segunda explicación es la abstención. Esta, ya sea libre o forzada, al final, favoreció al partido oficial, el cual, aparentemente, no quería una votación masiva. Tan no la quería que el 20 de marzo, cuando la población debía desplazarse largas distancias para acudir al centro de votación y emitir el sufragio, el servicio del transporte público disminuyó notablemente. Por otro lado, el desorden del evento electoral alcanzó tal volumen que es difícil pensar que la única explicación sean la inadecuación del sistema electoral a la realidad del país, la ineficiencia del Tribunal Supremo Electoral y un código electoral que permite hacer muchas trampas. Mientras no se investigue debidamente la responsabilidad de los magistrados y se demuestre lo contrario, no es aventurado

afirmar que ha habido una conspiración para impedir la votación masiva de la población electoralmente activa, obstaculizando el sufragio de unos y ahuyentando de las urnas a quienes temen la polarización.

La existencia de una conspiración implica reconocer, en primer lugar, la incompetencia de la Coalición. En efecto, la Coalición, independientemente de la estrategia de ARENA, cometió una serie de errores. El primero de ellos es haber caído en

la trampa del presidencialismo, olvidándose de las otras dos elecciones. No obstante que, en principio, no estaba muy interesada en la presidencia, sino en las elección de diputados y de concejos municipales, en la práctica, casi toda su energía y todos sus recursos los puso en la elección presidencial, confiando ingenuamente que ello influiría de todas maneras en las otras dos elecciones.

El segundo error es la falta de cohesión interna entre los cinco partidos del FMLN, Convergencia Democrática, el Movimiento Nacional Revolucionario y las fracciones respectivas. Dentro del FMLN, el PRS-ERP nunca aceptó la candidatura de Rubén Zamora, la cual consideró una imposición y un error estratégico, pues su tesis es que debía constituirse un centro amplio para aislar a ARENA. Por el otro lado, los otros partidos del FMLN reclaman que el PRS-ERP únicamente apoyó a sus candidatos, desentendiéndose de los demás. En estas circunstancias, resultaba muy difícil diseñar una estrategia electoral con posibilidades reales de éxito, lo cual se expresa claramente en la inconsistencia de su propaganda.

El tercer error fue la imposición de candidatos en las elecciones regionales y locales por parte del FMLN, forzando a la población a dar un voto de castigo o a no votar. En efecto, algunos de los candidatos propuestos para alcaldes o diputados tienen antecedentes personales



poco adecuados; en otros casos, los candidatos propuestos eran los anti-guos comandantes que en varias ocasiones durante la guerra atacaron las poblaciones, dirigieron su toma e hicieron pasar muy malos ratos a sus habitantes; al no presentarse coaligados en las elecciones de diputados y alcaldes, los votos se dispersaron al mismo tiempo que resultó más difícil encontrar a los candidatos con las cualidades apropiadas. De esta forma, la opinión de los líderes naturales de los pueblos y de las comunidades fue relegada ante los intereses de los aparatos partidarios.

El cuarto error de la izquierda consistió en aceptar, con la ingenuidad del novato, las llamadas "reglas del juego", sin advertir, al menos en público, que la estructura electoral estaba operando en contra de sus intereses al impedirle participar en condiciones iguales. Si acaso conoció con anticipación lo que se estaba fraguando, no lo hizo público, quizás para no desanimar a sus partidarios y pensando que, en última instancia, el voto a su favor acabaría imponiéndose. Al final, la Coalición se quedó sin el resultado electoral esperado y sin la fuerza de la protesta.

Excluir del debate público, en particular en la primera vuelta, los acuerdos de paz fue otro error de la Coalición. El pasado debió ser recuperado y debatido críticamente durante la campaña electoral para así proyectarse hacia el futuro realmente. De hecho, uno de los aspectos del pasado que más daño causó a la izquierda fue el sabotaje del pasado, el cual, por otro lado, fue hábilmente explotado por la publicidad oficial.

La Coalición temió enfrentar su propio pasado y el de su adversario, tal vez por no saber cómo hacerlo sin exacerbar la polarización. Se puede hacer publicidad sin tomar en cuenta el pasado, pero en El Salvador no se puede hacer campaña electoral olvidándose de la guerra y de sus secuelas. Así como ARENA rehuye su pasado terrorista y escuadrero, el FMLN evade sus antecedentes subversivos y terroristas en algunos momentos o en algunas acciones. De esta forma, ambos contendientes se encuentran atados por ese pasado y temen enfrentarlo. Si la Coalición hubiese tomado la iniciativa y hubiese provocado un debate público, quizás tampoco hubiese ganado las elecciones, pero el país podría haber encontrado el camino de la reconciliación. Por consiguiente, el error de la Coalición consistió en haber silenciado su protagonismo en la negociación y en la pacificación para no discutir el protagonismo del FMLN en la guerra.

La posibilidad de una conspiración electoral también implica, en segundo lugar, el mandato de la División Electoral de ONUSAL, cuya buena voluntad e inexperiencia en la política salvadoreña fueron sorprendidas. El objetivo de esta división era garantizar unas elecciones

libres, limpias y transparentes y, en consecuencia, legítimas. Ingenuamente pensó que esos objetivos los conseguiría aplicando los recursos técnicos propios de toda elección, sin caer en la cuenta del contexto salvadoreño. ONUSAL confió acríticamente en el Tribunal Supremo Electoral, después cayó en la cuenta de que éste tenía su propio plan, en el cual su asesoría y consejo no tenían cabida, pero aún así guardó silencio. Hasta el final de la primera vuelta, ONUSAL trató de salvar su mandato electoral a costa de su prestigio y declaró que las elecciones eran “aceptables”, aunque reconociendo una serie de irregularidades que presuntamente serían corregidas el 24 de abril. En ese momento, lo importante era cerrar toda posibilidad a la impugnación del proceso electoral, lo cual implicaba reconocer su fracaso.

En la segunda vuelta, la actitud de ONUSAL cambió tímida y progresivamente hasta advertir abiertamente que en la elección del 24 de abril se repetirían las dificultades del 20 de marzo, puesto que no se habían corregido las causas del desorden tal como había sido prometido. Sin embargo, la ambigüedad no desapareció. Bastaron unas cuantas reformas superficiales para que ONUSAL declarara que la segunda vuelta había estado “mejor organizada”.

Aunque ONUSAL no se atrevió a aclarar a la opinión pública cuán aceptables son estas elecciones de cara a los patrones democráticos establecidos, su insatisfacción se deduce del compromiso que hizo firmar a ARENA y a la Coalición para reformar el sistema electoral en los próximos dos años. Conseguida esta garantía, sólo cabía declarar que en los comicios del 24 de abril había habido una “clara mejoría”.

La técnica no lo es todo y mucho menos cuando ésta se aplica a un evento electoral en una sociedad polarizada como la salvadoreña. Las técnicas son muy importantes, pero



deben ser historizadas. La falta de sentido de lo político y el desconocimiento de las complicadas intimidades de la realidad salvadoreña favorecieron, en último término, a ARENA. A ONUSAL le ha faltado otra vez visión política sobre su mandato, coraje para cumplirlo fielmente y personal suficientemente calificado para ello.

3. Las elecciones aportan poco a la democratización

Las circunstancias en las cuales han tenido lugar los comicios de 1994 impiden calificarlos como "las elecciones del siglo". La desorganización y la ineficiencia — "el más flagrante ejemplo de torpeza burocrática", según el editorial del New York Times—, por un lado, y el abstencionismo, por el otro, son incompatibles con un proceso de democratización. El desinterés y la no participación de la mayoría de la población, ratificadas en la segunda vuelta, están estrechamente vinculadas con la desconfianza. Para quienes no votaron, las elecciones no representan el medio adecuado para transformar El Salvador.

Ciertamente, se permitió la participación de todos los partidos políticos sin excepción, pero no se garantizó la igualdad de condiciones en la contienda, ni siquiera en lo estrictamente electoral. Para la democratización del país, la participación de todos es necesaria, pero no suficiente. Uno de los requisitos indispensables es que las condiciones de esa participación sean iguales para todos. Debido a que esa igualdad no está garantizada, ONUSAL añadió a la lista de reformas la del sistema electoral. No podía ser de otra manera, pues el sistema electoral no podía ser la excepción en un país donde la institucionalidad del Estado es casi inexistente.

Una lección importante que dejan estas elecciones es que son necesarias transformaciones estructurales globales para que todos podamos decidir sobre el destino de El Salvador en igualdad de condiciones, sin desconfianzas mutuas, sin temor, sin desinterés y sin una burocracia manipuladora. Pero para que esto sea realidad algún día no muy lejano es indispensable mejorar la situación socio económica y cultural de la mayoría marginada. Sin estas transformaciones estructurales, la elaboración de un nuevo código electoral no coadyuvará a la democratización real de El Salvador.

Las transformaciones que necesita El Salvador no se alcanzarán reformando unos cuantos artículos de la Constitución o de la legislación secundaria o cambiando de nombre a instancias como el Tribunal Supremo Electoral o la Corte de Cuentas. Quienes así piensan dan por sentada la existencia del Estado, lo cual es un error garrafal, puesto que, precisamente, de lo que se trata es de constituir el Estado real y efectivamente. Después y sólo si los derechos vitales de los ciudadanos

están garantizados y protegidos podrá hablarse de un Estado de derecho. Entonces, vendrán la administración de justicia, un sistema electoral que garantice el voto masivo de los ciudadanos y, en una palabra, la democratización.

ARENA desperdió una oportunidad para propiciar unas elecciones masivas, libres, limpias y transparentes que, si las hubiese ganado, le hubiesen dado un triunfo inobjetable, una representatividad ampliamente reconocida y un estímulo para avanzar aún más en la democratización. Pero el temor a la expresión masiva de la voluntad popular resultó invencible y no dejó otra alternativa que recurrir a los medios coercitivos para imponerse. No obstante haber impedido la votación masiva, el esperado triunfo presidencial no se produjo en la primera vuelta. De todas maneras, al final, el triunfo le pertenece al partido oficial; pero aún así, no le será fácil gobernar.

Para quienes ven el proceso salvadoreño desde fuera y desde la perspectiva de la guerra, los resultados electorales de la izquierda son satisfactorios y, en consecuencia, se congratulan y felicitan al país porque la ex guerrilla se ha convertido en un partido político que cuenta ya con una representación legal en la estructura de poder. Sin negar la verdad que hay en esta valoración, la perspectiva desde la que se hace es insuficiente.

La izquierda también desaprovechó el proceso electoral para consolidarse internamente y definir mejor su identidad ante los retos planteados al país. Así como su mera participación en el evento electoral no se tradujo en el número de votos esperados, su simple presencia en la escena política tampoco rendirá los resultados necesarios para impulsar la democratización de El Salvador. El control del poder estatal es importante, pero no lo es todo, ni mucho menos. Lo realmente importante no es controlar el poder, sino impulsar las transformaciones estructurales que el país reclama urgentemente. La oposición es más eficaz porque es más libre para impulsar esas transformaciones, siempre y cuando sus acciones estén orientadas por principios políticos y éticos y esté comprometida ineludiblemente con las necesidades y el bienestar de las mayorías populares.

El triunfo de ARENA deja a El Salvador ante una paradoja muy difícil de resolver. El partido más antidemocrático seguirá al frente de una transición cuya meta formal es la democratización durante otros cinco años. Indudablemente, El Salvador ha cambiado y está cambiando, se encuentra en movimiento, pero no necesariamente se está moviendo en la dirección correcta. No es aventurado pensar que ARENA busque llevar el país hacia un régimen autoritario con formalidades democráticas. La década de gobierno de ARENA que El Salvador tiene por delante dejará una huella muy importante en su realidad social, econó-

mica, política y cultural. La cuestión es si esa huella será para el bien y no para el mal de El Salvador. Por eso, ahora con mayor razón que antes, conviene mantener en el horizonte los acuerdos de paz y la sangre derramada por todos los mártires salvadoreños.

San Salvador, 30 de abril de 1994.

